

IEQROO/CGEPJ/A-056-2025

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE PERSONAS JUZGADORAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR, EN LA ETAPA DE ASIGNACIÓN DE CARGOS, QUE LAS PERSONAS CANDIDATAS A CARGOS EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2025 NO HAYAN INCURRIDO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 38, FRACCIONES V, VI Y VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 43, FRACCIONES VI Y VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.

ANTECEDENTES

- I. El 13 de abril de 2020, el Presidente de la República, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), todas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
- II. El 05 de Septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el Decreto número 042 de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y del Código Penal para el Estado Libre y



Soberano de Quintana Roo, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

- III. El 29 de mayo de 2023, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal) en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. La modificación al artículo 38 de la Constitución Federal se hizo en los términos siguientes:

"Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

(...) Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público."

- IV. El 06 de julio de 2023, la Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (Constitución Local), aprobó la emisión del Decreto 089, por el que se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 17, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (LIPEQROO), en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, identificada como Ley 3 de 3.
- V. El 29 de agosto de 2023, se publicó en el periódico oficial el Decreto de Declaratoria número 003 por el que se reforma el Artículo 43 de la Constitución Local, en materia de suspensión de prerrogativas de la ciudadanía quintanarroense, estableciéndose el supuesto jurídico de la 3 de 3 contra la violencia.



- VI.** El 06 de diciembre de 2023, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo mediante el Acuerdo IEQROO/CG/A-086-2023 aprobó los Criterios y procedimientos a seguir en materia de Paridad en el registro de candidaturas que se postulen para las elecciones de miembros de los Ayuntamientos y Diputaciones en el Proceso Electoral Local 2024.
- VII.** El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de reforma del Poder Judicial, la cual contempló diversas disposiciones en materia de elección popular de los integrantes del Poder Judicial Federal.
- VIII.** En fecha 13 de enero de 2025, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la Declaratoria 001 de la Comisión Permanente de la Honorable XVIII Legislatura del Congreso del Estado, en virtud de la cual, entraron en vigor diversas reformas, adiciones y derogaciones a múltiples disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de reforma a la organización de la elección de las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de esta entidad federativa, en armonía con la reforma constitucional nacional.
- IX.** El 19 de marzo de 2025, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo IEQROO/CGEPJ/A028-2025, los Lineamientos por los que se establecen los Criterios y Procedimientos a seguir respecto a la recepción de los listados y expedientes de personas candidatas que participarán en el Proceso Electoral Extraordinario para la integración del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025, remitidos por la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

En esa misma fecha, el Poder Legislativo entregó a través de la Oficialía de Partes de la Secretaría Ejecutiva del Instituto los listados y expedientes de las personas postuladas por cada Poder del Estado que participarán en el Proceso Electoral Extraordinario para la integración del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

- X.** El 28 de marzo de 2025, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo IEQROO/CGEPJ/A034-2025, la publicación y difusión del listado remitido por

el Poder Legislativo de Quintana Roo correspondiente a las personas candidatas a Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como Juezas y Jueces del Poder Judicial para el Proceso Electoral Extraordinario del Estado de Quintana Roo 2025.

- XI.** El 24 de abril de 2025, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se aprobó el Acuerdo INE/CG382/2025 por el que se aprueba el procedimiento a seguir para constatar que las personas candidatas a cargos en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 no hayan incurrido en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 38, fracciones V, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o del artículo 442 bis, en relación con el 456 numeral 1, inciso c), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- XII.** El 14 de mayo de 2025 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez del procedimiento aprobado por el INE para constatar que las personas candidatas a ocupar cargos en el nuevo Poder Judicial de la Federación cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución, expediente SUP-JE-171/2025 y acumulados.
- XIII.** En fecha 21 de mayo de 2025, mediante oficio número CIYND/MLCB/023/2025, la Presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), solicitó a la Dra. Cynthia Daniel Pérez Mérida, Fiscal Especializada en Combate a Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, una reunión de trabajo con la finalidad de coadyuvar con la Fiscalía General del Estado a través de un Convenio de Colaboración para la verificación y compulsas correspondiente a las candidaturas de la actual contienda electoral.
- XIV.** En fecha 22 de mayo de 2025, se llevó a cabo la reunión de trabajo con la Dra. Cynthia Daniel Pérez Mérida, Fiscal Especializada en Combate a Delitos Electorales, solicitando el apoyo para el Convenio de Colaboración citado en



el antecedente inmediato anterior.

- XV.** En fecha 26 de mayo de 2025, la Dirección de Cultura Política del IEQROO llevo a cabo la reunión de trabajo con la Directora General del Registro Civil del Estado, Lcda. Libeth Jiménez Cordero, con el objetivo de establecer la coadyuvancia para la verificación y compulsas de las personas deudoras alimentarias morosas.
- XVI.** En fechas 22 y 27 de mayo, en Reuniones Formales de la Comisión de Igualdad y No Discriminación ampliadas a las Consejerías para la elección de Personas Juzgadoras, a la Secretaria Ejecutiva y al Director Jurídico, todas del Instituto, se analizó el Procedimiento para Verificar, en la etapa de asignación de cargos, que las Personas Candidatas a cargos en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025 no hayan incurrido en alguno de los supuesto establecidos en el artículo 38, fracciones V, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 43, fracciones VI y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
- XVII.** El 29 de mayo, en sesión extraordinaria con carácter de urgente de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, se aprobó por mayoría de votos de las integrantes de la Comisión, el Proyecto de Proyecto de Acuerdo del Consejo General para la Elección de Personas Juzgadoras del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determina el Procedimiento para Verificar, en la etapa de asignación de cargos, que las Personas Candidatas a cargos en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025 no hayan incurrido en alguno de los supuesto establecidos en el artículo 38, fracciones V, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 43, fracciones VI y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
- XVIII.** El propio 29 de mayo, mediante el oficio CiyND/MLCB/025/2025 la Presidencia de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, remitió a la Consejera Presidenta del Instituto, el proyecto de Acuerdo del Consejo General para la Elección de Personas Juzgadoras del Instituto Electoral de Quintana Roo, por

medio del cual se determina el Procedimiento para Verificar, en la etapa de asignación de cargos, que las Personas Candidatas a cargos en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025 no hayan incurrido en alguno de los supuesto establecidos en el artículo 38, fracciones V, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 43, fracciones VI y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

- XIX.** El 29 de mayo, en reunión formal de trabajo urgente del Consejo General para el PEEPJ2025, con el acompañamiento de la Dirección de Cultura Política y la Dirección Jurídica, todas del Instituto, se abordó lo relativo al Procedimiento descrito en los antecedentes XVI, XVII y XVIII, del presente documento.
- XX.** En fecha 30 de mayo, en reunión formal de trabajo urgente del Consejo General para el PEEPJ2025, con el acompañamiento de la Dirección de Cultura Política y la Dirección Jurídica, todas del Instituto se desahogó lo relativo al Procedimiento descrito en los antecedentes XVI, XVII y XVIII, del presente documento.

En consecuencia, el presente Acuerdo es puesto a la consideración de este órgano máximo de dirección, al tenor de los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDOS

1. El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, establece que los poderes públicos de las entidades federativas se organizarán conforme la Constitución de cada uno de ellos, las que garantizarán en materia electoral que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
2. Los numerales 10 y 11, del Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la Constitución de México, refieren que, en las entidades federativas, las elecciones estarán a cargo de los Organismos Público Locales Electorales

(OPLE) en los términos de la propia Constitución Federal, que ejercerán todas aquellas funciones no reservadas al INE y las que determine la ley.

3. De conformidad a lo expuesto en el numeral 2 del artículo 98, de la LGIPE, los OPLE son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la LEGIPE y las leyes locales correspondientes.
4. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49 fracción II de la Constitución Local y 120 de la LIPEQROO, establece que el IEQROO es el organismo público autónomo, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, depositario y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en la entidad, así como de encargarse de su desarrollo vigilancia y calificación en su caso; profesional en su desempeño e independiente en sus decisiones y funcionamiento.
5. Derivado de lo novedoso del PEEPJ 2025, existe la necesidad de que el Instituto, en cumplimiento al mandato constitucional y legal, establezca reglas claras y específicas para verificar que las personas que obtengan el mayor número de votos y, por consiguiente, se les asigne un cargo, no se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 38 fracciones V, VI y VII de la Constitución Federal; 43 fracciones VI y VII de la Constitución Local. Por tanto, atendiendo a lo dispuesto en el inciso c) del transitorio tercero del decreto de reforma en materia de elección del Poder Judicial del Estado, esta autoridad cuenta con la atribución de emitir los acuerdos necesarios para garantizar las obligaciones encomendadas con motivo de la organización del PEEPJ 2025, entre ellos, garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables a los procesos electorales estatales.

De ahí que, esta autoridad en uso de su atribución y en ejercicio de la facultad reglamentaria conferida, emita un procedimiento de verificación que desarrolle los pasos a seguir para cumplir con los preceptos constitucionales y legales.

6. Dado que tanto la Constitución Federal como la local establecen, que para el ejercicio del cargo las personas que los ocupen deben cumplir las condiciones



y calidades que las mismas normas prevén, se estima que, para el acto de asignación esta autoridad debe garantizar que su cubran tales condiciones y calidades.

Al respecto, el artículo 35 fracción II de la Constitución Federal, en relación con el 41 fracción II de la Constitución Local es derecho de la ciudadanía ser votada, para todos los cargos de elección popular siempre y cuando cumpla con los requisitos, condiciones y términos exigidos por las leyes. El artículo 116 fracción III párrafos tercero y cuarto de la Constitución Federal disponen que las magistraturas y personas juezas integrantes de los poderes judiciales locales, deben reunir los requisitos señalados por las fracciones I a la IV párrafo segundo del artículo 97 de la misma Constitución, y también los relativos y coincidentes que prevén las Constituciones locales; además establece que tanto la selección de candidaturas y elección de dichos cargos, se realizará conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala la Constitución Federal, estableciendo que en ese orden de ideas, deben contemplarse mecanismos de evaluación y selección que garanticen, entre otros requisitos, la honestidad y buena fama pública de las personas que los ocuparán.

El artículo 97 de la Constitución Federal estatuye de manera coincidente con el 101 fracción IV de la Constitución Local que, para ser electa como Magistrada o Magistrado, así como Jueza o Juez del Tribunal Superior de Justicia, se debe gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad.

Por su parte el artículo 17 de la Ley Local, dispone que son elegibles para los cargos de Gubernatura, Diputaciones al Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, la ciudadanía del Estado que teniendo la calidad de electora reúnan los requisitos que establecen la Constitución Federal, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, así como sujetarse a los procedimientos establecidos en el presente ordenamiento; así como, no estar condenada o condenado por el delito de VPcMRG, ni haber sido sancionada o sancionado vía administrativa por ejercer VPcMRG, requisito que también resulta aplicable a las candidaturas del PEEPJ2025 al tratarse de cargos a elegir a través del voto popular.



Adicional a ello, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023, del Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 38 y 102 de la Constitución Federal, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, se estableció la restricción para que, ninguna persona que se encuentre dentro de los supuestos enlistados en dicha fracción, pueda ser registrada como candidata ni tampoco pueda ser nombrada para un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

De lo anterior se deduce que, el derecho político-electoral para acceder a una candidatura o a un cargo público no es absoluto, dado que para su ejercicio resulta indispensable el cumplimiento de una serie de requisitos, de elegibilidad que la propia Constitución Federal y Local establecen. Los cuales, se entienden como las condiciones, cualidades, características, capacidades y aptitudes establecidas por la Constitución Federal, la Ley Local, que una persona debe cumplir para poder ocupar un cargo de elección popular, en consecuencia, la elegibilidad se traduce en la satisfacción de determinados requisitos inherentes a la persona, no solo para obtener la candidatura, si no para ocupar el cargo y ejercerlo.

El Decreto de reforma al Poder Judicial Local, otorgó facultades a los Comités de Evaluación para que integraran el listado de candidaturas, siendo competentes para verificar los requisitos de elegibilidad de las personas y posteriormente, a través del Congreso del Estado remitirla al Instituto, para la continuidad de las etapas del PEE 2025 como la calificación de la elección, declaración de su validez, entrega de constancias de mayoría a las personas ganadoras, así como la asignación de cargos.

En ese sentido, al ser la asignación -que compete realizar al Instituto el acto previo a que las personas elegidas ejerzan el cargo público, luego entonces, tienen a su cargo la enorme responsabilidad de garantizar el cumplimiento cabal a los citados mandatos constitucionales y legales, por lo tanto, como garantía a los mandatos constitucionales y legales se encuentra constreñido a ejecutar las acciones necesarias para verificar la elegibilidad de quienes accederán a ellos.



En ese sentido, en ejercicio de la facultad reglamentaria, y con el propósito de colmar los vacíos normativos derivados de la reforma al Poder Judicial local, se procedió a la construcción del procedimiento de verificación, el cual contempla entre sus etapas, el mecanismo de asignación a través del cual se harán efectivas las disposiciones constitucionales y legales al verificar la elegibilidad de las personas candidatas en la etapa de calificación de la elección, puesto que corresponde a este órgano electoral la asignación de cargos.

Al respecto, el artículo 35 fracción II de la Constitución Federal reconoce el derecho de la ciudadanía de poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, estableciendo así el derecho humano al voto y ocupar el cargo para el cual se eligió. Resulta aplicable la Jurisprudencia 27/2002, del **Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, de rubro DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN, en la cual, se ha señalado que el derecho al voto y a ser votado son una misma institución, que reside en la persona electa.

Lo anterior, es acorde a la **Jurisprudencia 20/2010**, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: **DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO**. De esta manera, el derecho a recibir el voto entraña contender en una elección, declaración de la candidatura electa, desempeñar el cargo encomendado y ejercer todos los derechos inherentes al cargo para el cual fue electa o electo.

Por tanto, dicho mecanismo de asignación tiene como finalidad legitimar el derecho de la ciudadanía que emitió el sufragio, para que, quien ostente el cargo, sea la persona que además de haber obtenido el mayor porcentaje de votación, haya cumplido con las exigencias establecidas en la norma constitucional y en la legislación de la materia, lo que permitirá a la autoridad electoral ceñir su actuación a los principios de objetividad y certeza.

Aunado a lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis XII/97, establece que el análisis de los requisitos de elegibilidad, a pesar de que hayan quedado firmes por no

haberse impugnado en el registro de las candidaturas, debe darse un segundo momento o etapa en la cual se efectúe el cómputo final para realizar la declaración de validez, toda vez que la cuestión de la elegibilidad tiene que ver con cualidades que debe reunir una persona, incluso para el ejercicio del mismo cargo, razón por la que, a quien no cumpla con los requisitos previstos en la Constitución, no puede declararse electo para el cargo de elección popular por lo que se haya postulado.

7. En consecuencia, resulta importante que el IEQROO, contemple las acciones y procedimientos que permitan, previo a declarar la validez de una elección, revisar que las personas candidatas a juzgadoras electas cumplan con los requisitos de elegibilidad y que no hayan incurrido en algunos de los supuestos establecidos en el artículo 38, fracciones V, VI y VII de la Constitución Federal y el artículo 43, fracciones I, VI y VII de la Constitución Local.

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Consejo General emite el presente:

ACUERDO

PRIMERO: Se aprueba el presente Acuerdo y su anexo, en la forma y términos expresado en sus Antecedentes y Considerandos.

SEGUNDO: Se instruye a la Dirección de Cultura Política para que lleve a cabo las acciones pertinentes para la verificación correspondiente.

TERCERO Notifíquese el presente Acuerdo y su anexo, mediante atento oficio, por correo electrónico, a través de la Consejera Presidenta, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral.

CUARTO: Notifíquese el presente Acuerdo y su anexo, mediante atento oficio, por correo electrónico, a través de la Secretaría Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General y al Titular del Órgano Interno de Control de este Instituto.



QUINTO: Notifíquese el presente Acuerdo y su anexo, mediante atento oficio, por correo electrónico, a través de la Secretaría Ejecutiva, a las personas candidatas.

SEXTO: Publíquese y difúndase el presente Acuerdo y su anexo en los estrados y en la página oficial de internet del Instituto

SÉPTIMO: Cúmplase lo acordado.

Así lo aprobaron por mayoría de votos, con cuatro votos a favor de la Consejera Presidenta Rubí Pacheco Pérez; el Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, el Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz, y de la Consejera Electoral María Salomé Medina Montaña; y dos votos en contra de las Consejeras Electorales, Elizabeth Arredondo Gorocica y Maisie Lorena Contreras Briceño; todas y todos integrantes del Consejo General para la elección de personas juzgadoras del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria con carácter de urgente, celebrada el treinta y uno del mes de mayo de dos mil veinticinco, en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo.



**MTRA. RUBÍ PACHECO
PÉREZ
CONSEJERA PRESIDENTA**



**LCDA. GUADALUPE IRMA ESQUIVEL
MONROY
SECRETARIA EJECUTIVA**

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE PERSONAS JUZGADORAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR, EN LA ETAPA DE ASIGNACIÓN DE CARGOS, QUE LAS PERSONAS CANDIDATAS A CARGOS EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2025 NO HAYAN INCURRIDO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 38, FRACCIONES V, VI Y VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 43, FRACCIONES VI Y VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.

PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR, EN LA ETAPA DE ASIGNACIÓN DE CARGOS, QUE LAS PERSONAS CANDIDATAS A CARGOS EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2025 NO HAYAN INCURRIDO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 38, FRACCIONES V, VI Y VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 43, FRACCIONES VI Y VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.

GLOSARIO

Para los efectos de estos criterios, se entiende por:

1. En cuanto a los órganos y autoridades:
 - a. **Consejo General:** El Consejo General para la elección de personas juzgadoras del Instituto conformado únicamente por la Consejera Presidenta, las Consejerías Electorales y por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo.
 - b. **Dirección:** Dirección de Cultura Política del Instituto.
 - c. **Instituto:** Instituto Electoral de Quintana Roo.
 - d. **Fiscalía:** Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

En cuanto a los conceptos:

- a. **Cargo:** Entendido este por Magistratura del Tribunal Superior de Justicia, Magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial y Personas Juzgadoras
- b. **Constitución Federal:** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- c. **Constitución Local:** Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
- d. **Ley General:** Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
- e. **Ley Local:** Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo
- f. **PEEPJ 2025:** Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025.
- g. **VPcMRG:** Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

JUSTIFICACIÓN

Derivado de lo novedoso del PEEPJ 2025, existe la necesidad de que el Instituto, en cumplimiento al mandato constitucional y legal, establezca reglas claras y específicas para verificar que las personas que obtengan el mayor número de votos y, por consiguiente, se les asigne un cargo, no se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 38 fracciones V, VI y VII de la Constitución Federal; 43 fracciones VI y VII de la Constitución Local. Por tanto, atendiendo a lo dispuesto en el inciso c) del transitorio tercero del decreto de reforma en materia de elección del Poder Judicial del Estado, esta autoridad cuenta con la atribución de emitir los acuerdos necesarios para garantizar las obligaciones encomendadas con motivo de la organización del PEEPJ 2025, entre ellos, garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables a los procesos electorales estatales. De ahí que, esta autoridad en uso de su atribución y en ejercicio de la facultad reglamentaria conferida, emita un procedimiento de verificación que desarrolle los pasos a seguir para cumplir con los preceptos constitucionales y legales.

Dado que tanto la Constitución Federal como la local establecen, que para el ejercicio del cargo las personas que los ocupen deben cumplir las condiciones y calidades que las mismas normas prevén, se estima que, para el acto de asignación esta autoridad debe garantizar que su cubran tales condiciones y calidades.

Al respecto, el artículo 35 fracción II de la Constitución Federal, en relación con el 41 fracción II de la Constitución Local es derecho de la ciudadanía ser votada, para todos los cargos de elección popular siempre y cuando cumpla con los requisitos, condiciones y términos exigidos por las leyes. El artículo 116 fracción III párrafos tercero y cuarto de la Constitución Federal disponen que las magistraturas y personas juezas integrantes de los poderes judiciales locales, deben reunir los requisitos señalados por las fracciones I a la IV párrafo segundo del artículo 97 de la misma Constitución, y también los relativos y coincidentes que prevén las Constituciones locales; además establece que tanto la selección de candidaturas y elección de dichos cargos, se realizará conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala la Constitución Federal, estableciendo que en ese orden de ideas, deben contemplarse mecanismos de evaluación y selección que garanticen, entre otros requisitos, la honestidad y buena fama pública de las personas que los ocuparán.



El artículo 97 de la Constitución Federal estatuye de manera coincidente con el 101 fracción IV de la Constitución Local que, para ser electa como Magistrada o Magistrado, así como Jueza o Juez del Tribunal Superior de Justicia, se debe gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad.

Por su parte el artículo 17 de la Ley Local, dispone que son elegibles para los cargos de Gobernatura, Diputaciones al Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, la ciudadanía del Estado que teniendo la calidad de electora reúnan los requisitos que establecen la Constitución Federal, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, así como sujetarse a los procedimientos establecidos en el presente ordenamiento; así como, no estar condenada o condenado por el delito de VPcMRG, ni haber sido sancionada o sancionado vía administrativa por ejercer VPcMRG, requisito que también resulta aplicable a las candidaturas del PEE 2025 al tratarse de cargos a elegir a través del voto popular.

Adicional a ello, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023, del Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 38 y 102 de la Constitución Federal, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, se estableció la restricción para que, ninguna persona que se encuentre dentro de los supuestos enlistados en dicha fracción, pueda ser registrada como candidata ni tampoco pueda ser nombrada para un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

De lo anterior se deduce que, el derecho político-electoral para acceder a una candidatura o a un cargo público no es absoluto, dado que para su ejercicio resulta indispensable el cumplimiento de una serie de requisitos, de elegibilidad que la propia Constitución Federal y Local establecen. Los cuales, se entienden como las condiciones, cualidades, características, capacidades y aptitudes establecidas por la Constitución Federal, la Ley Local, que una persona debe cumplir para poder ocupar un cargo de elección popular, en consecuencia, la elegibilidad se traduce en la satisfacción de determinados requisitos inherentes a la persona, no solo para obtener la candidatura, si no para ocupar el cargo y ejercerlo.

El Decreto de reforma al Poder Judicial Local, otorgó facultades a los Comités de Evaluación para que integraran el listado de candidaturas, siendo competentes para verificar los requisitos de elegibilidad de las personas y posteriormente, a

través del Congreso del Estado remitirla al Instituto, para la continuidad de las etapas del PEE 2025 como la calificación de la elección, declaración de su validez, entrega de constancias de mayoría a las personas ganadoras, así como la asignación de cargos.

En ese sentido, al ser la asignación -que compete realizar al Instituto el acto previo a que las personas elegidas ejerzan el cargo público, luego entonces, tienen a su cargo la enorme responsabilidad de garantizar el cumplimiento cabal a los citados mandatos constitucionales y legales, por lo tanto, como garantía a los mandatos constitucionales y legales se encuentra constreñido a ejecutar las acciones necesarias para verificar la elegibilidad de quienes accederán a ellos.

En ese sentido, en ejercicio de la facultad reglamentaria, y con el propósito de colmar los vacíos normativos derivados de la reforma al Poder Judicial local, se procedió a la construcción del procedimiento de verificación, el cual contempla entre sus etapas, el mecanismo de asignación a través del cual se harán efectivas las disposiciones constitucionales y legales al verificar la elegibilidad de las personas candidatas en la etapa de calificación de la elección, puesto que corresponde a este órgano electoral la asignación de cargos y, en consecuencia, resolver en el caso de que alguna de las candidaturas que resulten favorecidas con el voto de la ciudadanía actualice algún supuesto de inelegibilidad.

Al respecto, el artículo 35 fracción II de la Constitución Federal reconoce el derecho de la ciudadanía de poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, estableciendo así el derecho humano al voto y ocupar el cargo para el cual se eligió. Resulta aplicable la Jurisprudencia 27/2002, del **Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, de rubro DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN, en la cual, se ha señalado que el derecho al voto y a ser votado son una misma institución, que reside en la persona electa.

Por lo anterior, se estima procedente que, en el supuesto de que alguna candidatura que obtuviere el mayor porcentaje de votos actualizare alguna causal de inelegibilidad, se proceda a asignar el cargo a la siguiente persona de la lista con mayor número de votos en términos del procedimiento de verificación.



Lo anterior, es acorde a la **Jurisprudencia 20/2010**, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: **DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO**. De esta manera, el derecho a recibir el voto entraña contender en una elección, declaración de la candidatura electa, desempeñar el cargo encomendado y ejercer todos los derechos inherentes al cargo para el cual fue electa o electo.

Por tanto, dicho mecanismo de asignación tiene como finalidad legitimar el derecho de la ciudadanía que emitió el sufragio, para que, quien ostente el cargo, sea la persona que además de haber obtenido el mayor porcentaje de votación, haya cumplido con las exigencias establecidas en la norma constitucional y en la legislación de la materia, lo que permitirá a la autoridad electoral ceñir su actuación a los principios de objetividad y certeza.

Por lo anterior, se estima viable implementar un procedimiento de verificación sumario que permita cumplir con la obligación constitucional y, a su vez, tener certeza en su implementación, en los términos siguientes:

1) De la verificación de los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 38 fracciones V, VI y VII y 43 fracciones VI y VII de la Constitución Local; así como 17 fracción VI de la Ley Local en la etapa de asignación de cargos del PEE 2025.

El Instituto a través de la Presidencia del Consejo General, remitirá el 2 de junio del año en curso a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el listado de la totalidad de las personas candidatas en el PEEPJ2025 a efecto de solicitarle lleve a cabo el procedimiento de verificación y compulsa, para conocer si cuentan con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, feminicidio, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar o doméstica, violencia obstétrica, violación a la intimidad sexual, violencia vicaria o demás conductas antijurídicas semejantes o equiparables; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

Para la solicitud del apoyo a la Fiscalía, el Instituto deberá proporcionar en formato PDF y EXCEL, la información de cada una de las personas candidatas, siendo estas las siguientes:

1. Nombre Completo de la persona;



2. Género;
3. Clave Única de Registro de Población (CURP); o
4. OCR de la Credencial para votar con fotografía.

La información remitida por parte de la Fiscalía a este órgano comicial contendrá, la siguiente información:

- I. Nombre de la persona sancionada;
- II. Sexo de la persona sancionada;
- III. Ámbito territorial (Municipal);
- IV. En su caso, incidencia de esta sanción, respecto de la persona sancionada
- V. Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada, cuando menos:
 - a) Número de expediente;
 - b) Órgano resolutor;
 - c) Fecha de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada;
 - d) Delito sancionado;
 - e) En su caso, especificar, cuando sea necesario sobre el delito de violencia política en razón de género;
 - f) Sanción, y
- XI. Reincidencia de la conducta, en su caso.

La Fiscalía, proporcionará la información sí de la búsqueda realizada a la base de datos con la que se cuente, se advierta su existencia, en caso contrario, dicha instancia manifestará, que la Persona candidata no cuenta con condena, sanción o sentencia firme por los delitos ya enunciados.

2) De la verificación de los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 38 fracción VII último párrafo y 43 fracción VII último párrafo de la Constitución Local; así como 17 fracción VII de la Ley Local en la etapa de asignación de cargos del PEEJ2025.

El Instituto solicitará en fecha 2 de junio a la Dirección General del Registro Civil de Estado de Quintana Roo, la verificación y compulsas con la base de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado con la que cuenta dicho organismo, a efecto de informar a esta autoridad si las personas candidatas se encuentran inscritas en dicho Registro.

La Dirección General del Registro Civil del Estado tendrá un término de 96 horas

contadas a partir de la debida notificación de la solicitud de apoyo y colaboración, para llevar a cabo la verificación y compulsa de la información solicitada, y su remisión a este Instituto.

Para la solicitud del apoyo a la Dirección General del Registro Civil, es Instituto deberá proporcionar en formato PDF y EXCEL, la información de cada una de las personas candidatas, siendo estas las siguientes:

1. Nombre Completo de la persona;
2. Clave Única de Registro de Población (CURP).

3) De la verificación del requisito de elegibilidad respecto de Violencia política en Razón de Género en materia administrativa.

La Dirección, el 5 de junio solicitará a la Dirección Jurídica del Instituto mediante atento oficio, llevar a cabo de manera inmediata un procedimiento de verificación y compulsa de las personas candidatas a efecto de informar si se encuentran inscritas en Registro Estatal de Personas Sancionadas por Infracciones a la Normatividad Local en Materia Electoral y de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Cuando de la verificación y compulsa se advierta que algunas de las personas candidatas se encuentra inscrito en el citado registro, la Dirección Jurídica remitirá el acta circunstanciada por cada una persona que se encuentra en esta situación, debiendo informarlo mediante oficio a la Dirección, a efecto de que se informe al Consejo General, y lleve a cabo las acciones conducentes.

Tratándose del Registro Nacional, de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; la Dirección el 5 de junio solicitará mediante atento oficio a la Secretaria Ejecutiva del Instituto, llevar a cabo de manera inmediata un procedimiento de verificación y compulsa de las personas candidatas con la información básica que proporcione la Dirección para la verificación en el citado Registro, a efecto de informar si se encuentran inscritas en el mencionado registro.

Una vez realizada la verificación, se levantará un acta circunstanciada de las personas candidatas, cuando de la verificación y compulsa se advierta que algunas

de las personas candidatas se encuentra inscrito en el citado registro, la Secretaría Ejecutiva remitirá un documento en lo individual por cada una persona que se encuentra en esta situación.

La Secretaría Ejecutiva, remitirá el oficio correspondiente a la Dirección, a efecto de que se informe al Consejo General, y lleve a cabo las acciones conducentes.

4) De la información remitida por las autoridades. Una vez recepcionada la información, se efectuará un informe que será presentado al Consejo General.

Asimismo, de detectarse que alguna persona candidata se encuentra en algún supuesto, se procederá a notificar a la misma vía correo electrónico para que en un plazo de 12 horas a partir de la debida notificación, manifieste lo que ha su derecho corresponda y exhiba en su caso la documentación que considere pertinente.

Los resultados del procedimiento de revisión serán valorados por el Consejo General en la etapa de asignación de cargos, como parte de la verificación de la elegibilidad de la candidatura, por lo anterior se estima oportuno que, en el supuesto de que alguna candidatura que obtuviera el mayor número de votos, se advirtiera alguna causal de inelegibilidad, el Consejo General declarará acéfalo y notificará al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para los efectos legales a los que haya lugar.

5) De la asignación de cargos. En el supuesto de que alguna persona que, derivado del listado ganador actualice alguna causal de inelegibilidad y, que por esa razón el Consejo General se encuentre imposibilitado para asignar el cargo, se atenderá lo siguiente:

El Consejo General, procederá a declarar ese espacio como acéfalo, y deberá informar de manera inmediata al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para que determinen lo que en derecho corresponda.

Asimismo, el Consejo General deberá informar lo anterior a los Poderes del Estado para su conocimiento.

6) Los casos no previstos en el presente Procedimiento de verificación serán resueltos por el Consejo General del Instituto.

